

VISTOS, los autos para dictar sentencia en el juicio de				
amparo 449/2019 y sus acumulados 452/2019, 453/2019,				
454/2019 y 458/2019, promovidos respectivamente por (i)				
****** ****** ****; (ii) ****** *******				
*******; (iii) *** ***** ******; (iv) *****				

******** *********, contra actos del Comisionado Ejecutivo				
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y,				

RESULTANDO

PRIMERO. Demandas de Amparo. El siete y el ocho de marzo de dos mil diecinueve (i) presentaron sendas demandas de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en las que señalaron

"La 'RE<mark>SOLUCIÓN POR LA QUE SE</mark> DETERMINAN LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO QUE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS OTORGA A ANA LUISA VALENZUELA MUNGUÍA, A LOS ADOLESCENTES **DIEGO ALEXANDER BLANCARTE** VALENZUELA, ALEXIS **SANTIAGO** BLANCARTE **VALENZUELA BLANCARTE** YESENIA **GUADALUPE** VALENZUELA. ASÍ COMO A SU ESPOSO BLANCARTE LEAL POR LAS VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN AGRAVIO DIRECTO DE ANA LUISA VALENZUELA MUNGUÍA; EN TÉRMINOS DE LA RECOMENDACIÓN 49/2009 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS', emitida dentro del expediente

como acto reclamado el siguiente:



¹ Por conducto de su apoderada ****** ***** **** **********.

² Por conducto de su representante ****** ****** **********

administrativo CEAV/CIE/0163/2018, de fecha 15 de febrero de 2019, notificada en la misma fecha".

Los quejosos indicaron que no existía tercero interesado; narraron los antecedentes de los actos reclamados, señalaron como derechos violados los reconocidos en los artículos: (i) 1, 3, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (ii) 1, 2, 3, 7, 19, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, (iii) 1, 2, 4, 5, 8, 11, 19, 24, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, formularon los conceptos de violación que estimaron conducentes.

SEGUNDO. Admisión y acumulación. Las demandas fueron turnadas a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, se formó el expediente 449/2019, al cual se acumularon oficiosamente y de plano las demandas a las que les hubieran correspondido los expedientes 452/2019, 453/2019, 454/2019 y 458/2019.

TERCERO. Audiencia constitucional. Después de diferirse en una ocasión, la audiencia constitucional se celebró el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de este juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado constituye una resolución de naturaleza administrativa, de conformidad con el artículo 144 de la Ley General de Víctimas y tuvo ejecución en la Ciudad de México, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado.4

SEGUNDO. Antecedentes. Previo al estudio de fondo, este órgano jurisdiccional estima pertinente reseñar los antecedentes más relevantes con la finalidad de entender los problemas jurídicos a resolver. De las constancias que integran el expediente⁵ y del disco compacto que exhibió la autoridad responsable⁶, se advierten los siguientes:

1. El cinco de junio de dos mil nueve, se inició un incendio en un inmueble ubicado en la colonia "Y Griega", en Hermosillo, Sonora, el cual era arrendado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Dicho incendio se propagó al inmueble

⁴ De conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos ellos en relación con el Punto Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos territoriales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece,

⁵ Los que al ser documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

⁶ Que contiene los archivos digitales en formato PDF del expediente CEAV/CIE/163/2018, y los cuales tienen el carácter de una prueba documental, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal que lleva por rubro: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO". Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 1014. Registro: 2020051.

contiguo donde se ubicaba la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

*** **** ****** ****** recibió un dictamen médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se determinó una incapacidad orgánico-funcional permanente del setenta y seis por ciento.

2. Con motivo de esos hechos, el trece de julio de dos mil nueve, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 49/2009, en la que concluyó que:

"[...] la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la citada bodega, así como la carencia de un programa de seguridad tendente a la prevención, protección y combate de incendios y la ausencia de instalaciones y equipos para prevenir y combatir incendios, aunado ello a la carencia de un programa de capacitación preventiva en la materia, fueron los factores determinantes que originaron el día 5 de junio de 2009 el siniestro en la bodega arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado".

En consecuencia, la citada Comisión determinó que la conducta desplegada por *las tres instancias de gobierno*, contravino diversos instrumentos jurídicos en los que se reconoce:

"[...] el derecho a la vida y a la integridad personal así como a un nivel de vida adecuado de salud y bienestar y que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor lo requiere, que los niños gozarán de protección especial y gozará de los beneficios de la seguridad social para desarrollarse en buena salud, figurando entre los primeros que reciban protección y socorro, así como que las instituciones públicas y privadas de bienestar social deberán tener una



consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño, asegurando la protección y cuidado para su bienestar garantizando su supervivencia y desarrollo.

Por tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que al quedar plenamente acreditada la existencia de violaciones a los derechos humanos de los menores fallecidos y lesionados, de las personas que ahí laboraban y de las que el día del siniestro, arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de los familiares de los menores que acudían a la mencionada guardería, estimó que:

"[…<mark>] resulta oportuno <u>se realice la reparación del daño que</u></mark> corresponda; además, no debe perderse de vista que, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 1915, 1917 y 1918 del Código Civil Federal, así como 1o., 2o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos.

Aunado a ello, realizó diversas recomendaciones al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora.

3. En sesión de seis de agosto de dos mil nueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad entonces prevista en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para

investigar los hechos ocurridos el cinco de junio de dos mil nueve en la Guardería ABC.

El dieciséis de junio de dos mil diez, el Pleno del Alto Tribunal aprobó el dictamen relativo, en el que concluyó que en los lamentables hechos del cinco de junio de dos mil nueve, habían sido violados diversos derechos humanos, entre ellos, los derechos del niño y el principio de interés superior, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.

En ese tenor, sugirió a diversas autoridades las acciones mínimas que debían ser implementadas a fin de prevenir y evitar que vuelvan a suceder casos semejantes.

4. Con motivo de la Recomendación 49/2009 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se aperturaron dos expedientes relacionados con solicitudes de reparación integral de los quejosos.

Dentro del diverso expediente CEAV/CIE/0163/2018, se reconoció a *** ***** *********** como víctima directa [adulto lesionado] y a los demás quejosos se les reconoció como víctimas indirectas, de la siguiente manera:

Nombre	Calidad	Parentesco
*** **** ******	Víctima	Adulto
*****	directa	lesionado
**** ******	Víctima	Liio
******	indirecta 1	Hijo



***** ****** ****** ******	Víctima indirecta 2	Hijo
****** ******* ******* *******	Víctima indirecta 3	Hija
****** ******	Víctima indirecta 4	Esposo

5. La resolución dictada en el expediente CEAV/CIE/0131/2017, fue impugnada por los quejosos dentro del juicio de amparo 291/2018, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en donde se les concedió el amparo, entre otras razones, porque la autoridad responsable omitió cuantificar la medida de compensación respectiva a la integridad física, lucro cesante y la pérdida de oportunidades, en relación con las víctimas indirectas.

Dicha sentencia fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el recurso de revisión R.A. 11/2019.

Lo anterior, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), que lleva por rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)".7

PODER JÚDICIAL DE LA FEDERACIÓN

 a Víctimas la reparación integral del daño por las violaciones a sus derechos humanos, en términos de la Recomendación 49/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo a la facultad de investigación 1/2009, así como en relación con la causa penal 126/2009 y sus acumulados, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora.

- **6.** En atención a esa solicitud, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitió el proyecto de dictamen respectivo, de conformidad con la Recomendación 49/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- **8.** Inconformes con la resolución anterior, tanto la víctima directa como las víctimas indirectas promovieron los juicios de amparo que ahora se resuelven.

TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la

⁷ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, página 10. Registro: 2017123.



Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados.

De una interpretación íntegra de la demanda de amparo y de las demás constancias que obran en autos, este Juzgador concluye que los quejosos reclaman el acto siguiente:

La resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente CEAV/CIE/0163/2018, a través de la cual se determinaron medidas complementarias de reparación integral. Acto que se atribuye al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado.

Además, dicha existencia se corrobora con el archivo digital contenido en el disco compacto que acompañó a su informe y cuyo valor probatorio ya fue precisado.

QUINTO. Estudio de fondo. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, al no advertirse alguna de oficio, lo procedente es pasar al análisis de fondo.

En el artículo 76 de la Ley de Amparo se establece que el órgano jurisdiccional podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y demás razonamientos, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada.

En ese sentido, este Juzgado de Distrito analizará en su conjunto los conceptos de violación expuestos por los quejosos y que se relacionen con los mismos temas.

Aunado a ello, tomando en consideración que en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede en contra de resoluciones dictadas en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en las que se pueden alegar las violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, si éstas hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, se analizarán en primer lugar aquellos planteamientos que se relacionen con violaciones procesales en la substanciación del expediente CEAV/CIE/0163/2018, ya que de estimarse fundadas podrían transcender a la resolución reclamada, lo que provocaría la reposición del procedimiento a partir de que se cometió la violación, debiendo privilegiarse esa cuestión procesal sobre el análisis de los argumentos de fondo.

I. Incorporación al expediente del oficio de nueve de julio de dos mil dieciocho, dirigido al Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.⁸

Los cinco quejosos alegan que el Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debió incorporar al expediente CEAV/CIE/0163/2018, el oficio 095217614B00/000329, de nueve de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la Titular de la Unidad de Atención a Derechohabientes y por el Titular de la Unidad de Asuntos Consultivos y de Atención a Órganos Fiscalizadores, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como analizar su



contenido para emitir la resolución sobre las medidas de reparación del daño.

Los quejosos refieren que en ese oficio, las autoridades mencionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron saber al Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no era correcta la forma en la que se estaba realizando el análisis de complementariedad de la compensación, ya que: (i) la atención médica, psicológica y quirúrgica otorgada por el IMSS a las víctimas inmediatamente después del acontecimiento debían considerarse dentro del derecho de ayuda, asistencia y atención; (ii) los apoyos de atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación, la ayuda para educación de los menores, así como el pago de energía eléctrica, debían considerarse como medidas de rehabilitación; y, (iii) que los convenios de indemnización por responsabilidad del Estado Mexicano, debían considerarse como una medida de compensación.

En ese tenor, los quejosos sostienen que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce que ni el fideicomiso privado "Fondo de Apoyo, Manutención, Educación" ni el fideicomiso público "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", están dirigidos a indemnizar a los quejosos, sino que los apoyos que de ellos derivan deben estimarse como medidas de rehabilitación, por lo que fue indebido que se tomaran en consideración para la cuantificación de la reparación integral.

⁸ Este problema jurídico deriva de los conceptos de violación décimo, decimoprimero, decimosegundo, décimo y noveno, de las demandas de amparo, en el orden en el que están acumuladas, respectivamente.

Es **infundada** la violación procesal alegada por los quejosos, ya que contrariamente a lo que afirman, no era obligatorio que se agregara el oficio **095217614B00/000329**, de nueve de julio de dos mil dieciocho, al expediente **CEAV/CIE/0163/2018**.

Es importante destacar que en este apartado solo se analizará si se debió agregar y, en su caso, analizar el contenido del oficio **095217614B00/0003**29, dentro del expediente referido, pues lo relativo a si debieron tomarse en consideración los apoyos derivados de los fideicomisos mencionados, al determinarse los montos de la reparación integral, se hará en un apartado posterior, al estudiar en su conjunto los conceptos de violación relacionados con ese tema.

Lo infundado del planteamiento estriba en que dicho oficio no está dirigido al expediente CEAV/CIE/0163/2018, sino que en él se hace referencia al expediente CEAV/CIE/093/2017, vinculado con la solicitud de acceso a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, formulada por personas distintas a los quejosos.

Dicho oficio está dirigido genéricamente al Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con la finalidad de externar una opinión sobre la complementariedad de la compensación otorgada a solicitantes diferentes a los quejosos

Aunado a ello, de ninguna norma de la Ley General de Víctimas se desprende la obligación del Comité Interdisciplinario Evaluador de atender las opiniones que sobre la reparación integral emitan otras autoridades, pues dicho Comité es el único facultado para emitir una opinión y un proyecto de dictamen sobre la solicitud formulada por las víctimas para acceder a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de



Ayuda, o bien, respecto sobre la reparación integral y, en su caso, la compensación.

En efecto, en los artículos 93; fracciones I y II y 139, de la Ley General de Víctimas, se establece lo siguiente:

- "93. La Comisión Ejecutiva cuenta con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:
- I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;
- II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento".
- "139. Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los apoyos a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto, y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo.

La Comisión Ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador."

Por su parte, en el artículo 146 de la Ley General de Víctimas, se establece qué documentos son los que se deben integrar al expediente por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador y, de ninguna de sus fracciones se advierte que exista una obligación de integrar las opiniones formuladas por autoridades distintas. A continuación se transcribe ese precepto:



"146. El Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo:

- I. Los documentos presentados por la víctima;
- II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos".

Por tanto, el hecho de que el Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no haya agregado el oficio 095217614B00/000329, de iulio de dos mil_ dieciocho, al expediente nueve CEAV/CIE/0163/2018, desestimado 0 su contenido. constituye una violación procesal que haya trascendido al resultado de la resolución reclamada, ya que solo contenía una mera opinión que no resultaba de atención obligatoria para el mencionado Comité.

Al ser infundada la violación procesal alegada, lo procedente es pasar al análisis de los argumentos relacionados con la resolución de fondo.

II. Cuantificación de lucro cesante, pérdida de oportunidades y reparación del daño en la integridad física de las víctimas indirectas.⁹

que el lucro cesante está considerado como un daño material que se involucra con la pérdida de ingresos económicos futuros, es decir, la ganancia que se dejó de percibir como consecuencia de la violación de derechos humanos.

14



En ese sentido, argumentan que la resolución reclamada es ilegal porque no permite una reparación integral, ya que no contiene una cuantificación respecto del lucro cesante y la pérdida de oportunidades [en particular las de educación y prestaciones sociales] por lo que hace a ellos, de conformidad con el artículo 64, fracciones III y IV de la Ley General de Víctimas, a pesar de que en la valoración psicosocial que se les practicó se concluyó que el hecho victimizante provocó un impacto en su esfera psicoemotiva y física, lo que trajo una modificación al rol cotidiano de la familia después de hecho victimizante.

Sostienen que la reparación asignada no tiene un sentido restitutivo para que rehagan su proyecto de vida, es decir, que se excluyó la indemnización por lo que hace a la pérdida de oportunidades.

De igual manera, sostienen que la compensación, como medida comprendida dentro de la reparación integral, debe comprender la reparación del daño sufrido en la integridad física de las víctimas.

Así, aducen que la resolución reclamada es ilegal porque no contiene una cuantificación respecto a la reparación del daño sufrido en su integridad física como víctimas indirectas, de conformidad con el artículo 27, fracciones II y III, de la Ley General de Víctimas, aun cuando en la valoración que se les practicó se concluyó que tuvieron impactos en su esfera física, psíquica y moral de la siguiente manera:

****** **** tenía depresión leve, adicción a sustancias ilícitas, tabaco y alcohol, padecía gastritis, colitis y

pérdida de peso, lo que debió bastar para que se fijara en su favor un monto de indemnización por reparación de daño en su integridad física y que de manera indebida dichas afectaciones se consideraron dentro las medidas de rehabilitación.

******* presentó enojo, frustración, problemas de hábitos alimenticios, en lo relativo a la salud, tiene obesidad mórbida, quistes en los ovarios,

hipertensión, dolor de cabeza y caída de cabello.

****** ******* ******** aduce que la familia sufrió afectaciones en su integridad personal con motivo del hecho victimizante; sin embargo, en la resolución reclamada no se fija una cantidad como compensación, sino que el análisis de complementariedad de esos daños se hace en las medidas de rehabilitación.

Este Juez de Distrito estima que esos planteamientos son **infundados**, ya que la reparación integral por violación a derechos humanos incluye conceptos que, por su propia naturaleza, únicamente son susceptibles de ser considerados y calculados respecto de la víctima directa, mas no así respecto de las víctimas indirectas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho fundamental a la reparación integral permite anular todas las consecuencias del hecho victimizante, en la medida de lo posible, y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, como si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.



Dicha indemnización, no debe generar una ganancia a la víctima, sino que le debe otorgar un resarcimiento adecuado por el daño causado, es decir, no puede implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Así, es el daño causado el que determina (i) la naturaleza de la indemnización; y, (ii) su monto.

Lo anterior, se deduce de la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), que lleva por rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE". 10

Ahora bien, en el artículo 1, cuarto párrafo, de la Ley General de Víctimas, se establece lo siguiente:

"La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante".

De la norma transcrita es importante entender tres cosas:

La primera es que una reparación integral incluye cinco medidas: (i) de restitución; (ii) de rehabilitación; (iii) de compensación; (iv) de satisfacción; y, (v) garantías de no repetición, las cuales están definidas en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas de la siguiente manera:

(i) La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

¹⁰ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Materias Constitucional y Penal, página 752. Registro: 2014098.

- (ii) La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.
- (iii) La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.
- (iv) La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.
- (v) Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

La segunda cosa importante por entender es que esa reparación integral puede ser individual, colectiva, material, moral y simbólica, lo que implica que dependiendo del tipo de reparación le serán aplicables los conceptos que, por su naturaleza lo permitan, pues no todos los conceptos son compatibles con cada uno de esos tipos de reparación.

La tercera, es que cada una de las medidas que comprende la reparación integral debe ser implementada en favor de la víctima [sin especificar si directa o indirecta], para lo cual se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: (i) la gravedad y magnitud del hecho victimizante; y, (ii) las circunstancias y características del hecho victimizante.

Por su parte, en el artículo 26 de la Ley General de Víctimas, se establece lo siguiente:

"26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición".



Cómo se ve, esa norma alude a "víctimas", de manera genérica, a quienes se deben el daño que han sufrido como consecuencia del hecho victimizante; sin embargo, en el 4 de la Ley General de Víctimas se establece una distinción entre víctimas directas, indirectas y potenciales, de la siguiente manera:

"4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son vícti<mark>mas indirectas los familiares o aquell</mark>as personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento iudicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos".

Para este asunto, resulta relevante destacar que de ese precepto se advierte que las víctimas directas son las que sufren directamente el daño económico, físico, mental y emocional con motivo del hecho victimizante, es decir, quién sufre una lesión en sus bienes jurídicos o derechos; mientras que las víctimas indirectas son los familiares o las personas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella.

Sobre esta distinción la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el concepto de víctima directa hace referencia a la persona contra la que se dirige en forma inmediata, explícita y deliberadamente la conducta ilícita del agente del Estado y señala, por ejemplo, al individuo que pierde la vida, que sufre en su integridad, libertad o que se ve privado de su patrimonio.

En cambio, el concepto de víctima indirecta alude a un sujeto que no sufre la conducta ilícita de la misma forma que la víctima directa, es decir, que el daño que sufre una víctima indirecta es un efecto o consecuencia de la afectación que experimenta la víctima directa, por ejemplo, los familiares de las personas que han sufrido de manera directa e inmediata una vulneración en sus derechos humanos.

Lo anterior se advierte de la tesis aislada 1a. CCXII/2017 (10a.), que lleva por rubro: "VÍCTIMAS DIRECTA E INDIRECTA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SUS CONCEPTOS Y DIFERENCIAS".11

En ese orden de ideas, los efectos o consecuencias del hecho victimizante que sufre la víctima indirecta son así: indirectos, pues en caso contrario, es decir, si tales efectos o consecuencias fueron directos, entonces tendría que considerarse como víctima directa.

Por tanto, esa afectación indirecta requiere un nexo causal de orden lógico entre las consecuencias [afectaciones alegadas por la víctima indirecta] y su origen [hecho victimizante].

¹¹ Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Constitucional, página 450. Registro: 2015766.



Ese nexo causal sirve para demostrar que dichas consecuencias son forzosa e indefectiblemente producto del hecho victimizante, es decir, que de conformidad con el artículo 1, cuarto párrafo, de la Ley General de Víctimas, las circunstancias y características del hecho victimizante son las que con probabilidad han provocado las afectaciones que padecen las victimas indirectas.

Lo anterior es así, pues sería ilógico suponer que absolutamente todo lo que les sucede a las victimas indirectas después del hecho victimizante es una consecuencia de éste.

Así, este Juez de Distrito considera que en el caso, no existía una obligación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de fijar un monto de indemnización por concepto de lucro cesante, pérdida de oportunidades y reparación del daño a las víctimas indirectas, ya que dadas las circunstancias y características del hecho victimizante, ellas no podrían haber sufrido un menoscabo en los aspectos que buscan compensar esos rubros.

En efecto, una reparación integral no es aquella que otorga todas y cada una de las cinco medidas que establece el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, sino que es aquella que, en la medida de lo posible, restablece la situación que debió haber

existido con toda probabilidad y, en su caso, otorga un resarcimiento adecuado por el daño causado.

Para lograr una reparación integral no es forzoso e indefectible que se otorgue a las víctimas [directas, indirectas o potenciales] todas y cada una de las cinco medidas que la componen, sino que bastará con que sean implementadas en su favor aquellas que sean aplicables para lograr la finalidad de la reparación, para lo cual, se debe atender a las circunstancias y características del hecho victimizante, tal y como se establece en el artículo 1, cuarto párrafo, de la Ley General de Víctimas.

Así, tanto la pérdida de oportunidades como el lucro cesante solo pueden ser considerados como parte de la medida de compensación respecto de la víctima directa, pues los aspectos que aquellos conceptos buscan reparar derivan directamente de la afectación en su integridad física.

De conformidad con el artículo 64, fracciones III y IV, de la Ley General de Víctimas, el lucro cesante busca resarcir los perjuicios ocasionados, incluyendo el pago de los salarios o percepciones cuando por lesiones se cause incapacidad para

¹² Este Juez de Distrito no pasa por alto que el menor **** ******* ******* ****** también resultó lesionado en el incendio de la Guardería ABC; sin embargo, la afirmación hecha obedece a que únicamente *** ***** ****** fue considerada como víctima directa dentro del expediente **CEAV/CIE/0163/2018**, del que deriva el acto reclamado en este juicio de amparo.



trabajar; mientras que la pérdida de oportunidades se refiere, en particular, a las de educación y prestaciones sociales.

Así, solo las lesiones que sufrió *** ***** ***********

*******, como víctima directa, podrían haber ocasionado un perjuicio que ameritara compensar un lucro cesante, pues los salarios que dejó de percibir o que dejará de percibir derivan directamente de la afectación en su integridad física con motivo de la incapacidad de 76% que se le declaró.

Por su parte, en relación con la pérdida de oportunidades [en particular las de educación y prestaciones sociales], debe decirse que, en principio, dicho concepto integrante de la compensación, es aplicable a la víctima directa, pues es ella quien al resentir el hecho victimizante y que en este caso le produjo lesiones, podría haber perdido oportunidades de educación o de otras

Como ya se explicó, la finalidad de la reparación integral es anular las consecuencias del hecho victimizante, en la medida de lo posible, y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, como si el acto no se hubiera cometido y, en caso de no ser posible, otorgar una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.

Lo mismo acontece con la reparación del daño en la integridad física de las víctimas indirectas, pues ellos no estuvieron en el hecho victimizante, es decir, el incendio de la Guardería ABC no afectó directamente su integridad física.

Esa situación implica que las afectaciones que alegan, no son una consecuencia directa de ese incendio, pues este únicamente dañó la integridad física de *** ***** *******************, aunado a que la conducta personal que cada uno de ellos haya asumido y, en consecuencia, el deterioro en su salud, es una cuestión ajena al hecho victimizante.



Por tanto, no era necesario que se compensara de modo alguno las afectaciones que refieren las víctimas indirectas, pues el hecho victimizante solo afectó a la víctima directa, es decir, por las circunstancias y características del hecho victimizante, se puede concluir que las repercusiones de las victimas indirectas no podrían estimarse para una compensación, pues en este caso, solo *** ***** *********** sufrió daños en su integridad física.

En consecuencia, en el caso concreto, atendiendo a la gravedad y magnitud del hecho victimizante, como sus circunstancias y características, este Juez de Distrito estima que los conceptos de la compensación consistentes en lucro cesante, pérdida de oportunidades y reparación del daño sufrido en la integridad física, solo podían ser calculados respecto de la víctima directa y no así respecto de las víctimas indirectas.

Lo anterior adquiere una relevancia fundamental, pues las medidas que componen la reparación integral no son aplicables indistintamente tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas [o incluso potenciales] sino que dependiendo cada caso, se pueden implementar en aquellos rubros que, por la naturaleza del hecho victimizante, pueda ser aplicable a las víctimas indirectas.

De hecho, tratándose de la medida de compensación, es importante destacar que el propio artículo 64 de la Ley General de Víctimas, alude indistintamente a víctimas, salvo en la fracción II, relativa al daño moral, en la que expresamente distingue que tienen derecho a esa compensación tanto las víctimas directas e indirectas.

Esa situación, permite interpretar que, a diferencia del daño moral, en los otros supuestos, la Ley se refiere exclusivamente a la víctima directa.

Por tanto, el solo hecho de que se reconozca como víctimas indirectas a los familiares de las víctimas directas, no implica por sí y en automático, que deban decretarse en su beneficio todas y cada una de las medidas de reparación integral, sino que solo deben otorgarse en su beneficio aquellas que resulta aplicables con su condición de víctimas indirectas, es decir, como personas que no sufrieron directamente el hecho victimizante.

Lo anterior es acorde con el derecho fundamental a la reparación integral y al artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley General de Víctimas, ya que precisamente, las medidas de reparación deben decretarse atendiendo a las circunstancias del caso, es decir, tomando en consideración las circunstancias y características del hecho victimizante, lo que implica que solo aquellas que sean compatibles con la situación de las víctimas indirectas, pueden decretarse en su favor; sin embargo, es claro que el lucro cesante, la pérdida de oportunidades y reparación del daño en la integridad física son conceptos que se relacionan con las víctimas directas.

De estimarse lo contrario y sostener que deben decretarse las mismas medidas de reparación tanto a las víctimas directas como a las indirectas, entonces no tendría ningún sentido que en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas se hiciera una distinción entre ellas [incluso con las víctimas potenciales] pues bastaría con el solo hecho de que fueran consideradas genéricamente como víctimas.

En ese sentido, de estimarse que las víctimas indirectas tienen derecho a una compensación por lucro cesante, pérdida



de oportunidades y reparación del daño en la integridad física, se afectaría el sistema de reparación integral establecido en la Ley General de Víctimas, pues se permitiría que las víctimas indirectas obtuvieran el pago de una compensación por aspectos que, dada la naturaleza del hecho victimizante, solo resintieron las víctimas directas en su esfera de derechos.

No pasan inadvertidos para este Juez de Distrito los principios de interpretación *pro persona* y *pro víctima*, según los cuales las normas relativas a derechos humanos y de la Ley General de Víctimas, deben interpretarse en el sentido que más favorezca a la persona; sin embargo, para que puedan ser aplicables esos principios, las posibles interpretaciones de las normas deben ser válidas.

Esos principios resulta aplicables cuando existan diversas interpretaciones posibles de una norma, pues en esos casos se debe optar por la que otorgue la protección más amplia a las personas o a las víctimas; sin embargo, no pueden llevar al extremo de buscar una interpretación que sea idónea con la pretensión de las partes o que beneficien sus intereses.

En otras palabras, de esos principios no se deriva que siempre se busque la interpretación normativa que más favorezca los intereses de las personas sobre cualquier razón, sino que las interpretaciones posibles entre las que se puede optar deben ser válidas.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La Primera Sala del Alto Tribunal ha sostenido que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema interpretativo, se debe optar por la que protege en términos más amplios los derechos; sin embargo, para que esas

técnicas hermenéuticas puedan aplicarse, constituye un presupuesto indispensable que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, ya que la aplicación del principio *pro persona* no puede realizarse a partir de atribuir a la norma un significado o alcance que no tiene.

Al respecto, véase la tesis CCLXIII/2018 (10a.), que lleva por rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO".13

De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio *pro persona* opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o bien, (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se escoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho.

No obstante, es indispensable que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa, ya que el principio *pro persona* no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, es decir, de este principio no puede hacer aplicable una norma jurídica que no resulta aplicable, solo por el hecho de que eso favorecería más los intereses de los promoventes.

28

¹³ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, página 337. Registro: 2018696.



Lo anterior se advierte de la tesis 1a. CCVII/2018 (10a.), que lleva por rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. SOLO PUEDE UTILIZARSE SU VERTIENTE DE **CRITERIO** ΕN DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES". 14

Aunado a ello, de acceder a lo solicitado por en realidad se les estaría constituyendo una doble compensación por los mismos hechos, la cual está prohibida.

En efecto, dentro del juicio de amparo 291/2018, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, se ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que dentro del expediente CEAV/CIE/0131/2017, se cuantificara en su favor el lucro cesante, la pérdida de oportunidades y el daño a la integridad física como víctimas indirectas del menor *****

Esa situación, implica que de concederse un nuevo monto de compensación por los mismos conceptos a los quejosos mencionados, solo que como víctimas indirectas de *** ***** *******, en realidad se les estarían duplicando la indemnización.

Hay que recordar que esos quejosos fueron considerados indirectas víctimas expedientes como en los CEAV/CIE/0131/2017 y CEAV/CIE/0163/2018; sin embargo, el hecho victimizante sigue siendo el mismo, por esa razón, más

¹⁴ Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, página 378. Registro: 2018781.

allá de quienes fueron consideradas como víctimas directas en esos expedientes, lo cierto es que de otorgarles un nuevo monto por concepto de lucro cesante, pérdida de oportunidades y reparación del daño en la integridad física como víctimas indirectas, implicaría que dichos conceptos fueran pagados dos veces a tales quejosos.

En caso contrario, implicaría aceptar que el lucro cesante, las pérdidas de oportunidades y la afectación a la integridad física no dependen del hecho victimizante, sino de la cantidad de víctimas directas que hubiera en el núcleo familiar afectado, lo que conllevaría a que las víctimas indirectas obtuvieran tantos pagos de esos conceptos como víctimas directas hubiera, lo que desde luego, sería inviable.

por lo que hace a las medidas de lucro cesante, pérdida de oportunidades y afectación a la integridad física, pues en el caso dichos conceptos únicamente son aplicables a las víctimas directas del hecho victimizante y no así a las indirectas.

En este mismo orden de ideas, deben desestimarse los argumentos expuestos por *****

en los que sostiene (i) que en la resolución reclamada no se hizo una cuantificación sobre el daño físico que sufrió en su calidad de víctima directa e indirecta; (ii) que no se hizo una determinación de lucro cesante como víctima directa e indirecta; y, (iii) que no se determinó una compensación por lo que hace a pérdidas de oportunidades.¹⁵

 $^{^{15}}$ Estos argumentos se desprenden de los conceptos de violación primero, quinto y séptimo, de la demanda de amparo de este quejoso.



Como se advierte, esos planteamientos son muy similares a los que ya se desestimaron.

III. Distinción entre la reparación del daño entre víctimas directas y víctimas indirectas.¹⁶

****** ****** **** ****

******* y ***** ****** sostienen

que la resolución reclamada es ilegal porque se pretende hacer un análisis de reparación integral sin hacer una distinción entre

cada una de las víctimas, es decir, que la autoridad responsable debió analizar y precisar todas las medidas contenidas en los artículos 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, por cada uno de ellos

Es **inoperante** ese argumento, porque como ya se resolvió previamente, las víctimas indirectas, por el solo hecho de haber sido consideradas así, no obtienen el derecho a que se les repare en los mismos términos que las víctimas directas.

Es decir, las medidas que componen la reparación integral [restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición] solo son susceptibles de decretarse respecto de las víctimas indirectas en lo que sean compatibles con ese carácter y dependiendo de las características y circunstancias del hecho victimizante, pero no puede hacerse respecto de todas de medidas porque algunas, por su naturaleza, están dirigidas específicamente a las víctimas directas, por ser quienes resultaron afectadas directamente con el hecho victimizante.

Por tanto, solo las medidas de reparación que, por su naturaleza, sean aplicables a las víctimas indirectas, son las que se pueden decretar en su favor, pero no pueden otorgarse medidas que están dirigidas a reparar a la víctima directa, como por ejemplo, la reparación del daño que alegan los quejosos.

Entonces, toda vez que el planteamiento de los quejosos descansa en un argumento que ya fue desestimado en el apartado anterior, debe declararse inoperante.

Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la tesis XVII.1o.C.T.21 K, que lleva por rubro: "AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR



SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS".17

IV. Análisis de complementariedad relacionado con los tipos de responsabilidad y los pagos efectuados a través de diversos instrumentos.¹⁸

Los quejosos sostienen que es indebido que en la resolución reclamada se haya estimado que un fideicomiso público, un fideicomiso privado y un convenio de indemnización fueron creados para reparar de manera integral la violación de derechos humanos que sufrieron, aunado a que no se advierte que las víctimas indirectas hubieran obtenido algún pago por indemnización derivado de esos instrumentos.

Argumentan que el convenio de indemnización no tenía por objeto cumplir con la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que se emitió antes de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que introdujo la obligación de las autoridades de reparar las violaciones a derechos humanos.

Aunado a ello, refieren que en la resolución reclamada se dice que la reparación del daño en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, previsto entonces en el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución, prevé la posibilidad de que al acreditarse la violación a derechos humanos, la

Poder <u>Judicial-d</u> La Federacion

¹⁷ Sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Fuente: Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Común, página 1514. Registro: 182039.

recomendación incluya las medidas para lograr la efectiva restitución a los afectados.

Señalan que el fideicomiso privado denominado "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación" está integrado por Fundación IMSS, asociación civil, quien no puede ser considerada como una autoridad, sino que se trata de un particular que no puede reparar violaciones a derechos humanos, aunado a que en su constitución no participó el Instituto Mexicano del Seguro Social ni aportó recursos.

En relación con el Fideicomiso Público denominado "Fondo para Ayudas Extraordinarias con Motivo del Incendio de la Guardería ABC", que fue instaurado en cumplimiento al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de dos mil diez, se advierte que está destinado a mejorar la calidad de vida de los menores lesionados, específicamente su cuidado y educación, los cuales son conceptos diferentes a los establecidos en la medida de compensación.

Los quejosos señalan que dicho fideicomiso no se dictó atendiendo a los perjuicios, sufrimientos y pérdidas



económicamente evaluables que fueron consecuencia de la violación a derechos humanos.

doble descuento del apoyo que recibió a través del Fideicomiso Privado "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación", pues si bien recibió \$1'098,372.14 pesos (un millón noventa y ochenta mil trescientos setenta y dos pesos con catorce centavos), lo cierto es que esa cantidad fue en su calidad de victima indirecta de su hijo; sin embargo, ya se descontó esa cantidad en el expediente CEAV/CIE/0131/2017 y ahora en el expediente CEAV/CIE/0163/2018, aun cuando no las recibió como víctima directa.

La misma quejosa sostiene el análisis de que complementariedad realizado por la autoridad responsable se basó en el oficio 095217614B20/0927, de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el que la Titular de la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se advierte que los apoyos recibidos constituyen medidas de rehabilitación y no de compensación, por lo que no pueden tomarse en consideración al hacerse el estudio de complementariedad. En su caso, la autoridad responsable debió emitir una resolución de reparación integral sin mediar complementariedad alguna.

*** **** ****** sostiene que fue indebido

que se considerara que las cantidades que recibió del Convenio
de indemnización no tenían por objeto compensar su daño moral,
sino que fueron fijadas como reparación por la responsabilidad
patrimonial del Estado por su actividad irregular.

Este Juez de Distrito estima que dichos planteamientos son infundados, pues contrariamente a lo que afirman los quejosos, fue correcto que en las medidas complementarias de reparación integral, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tomara en consideración los montos otorgados a *** ***** ********** a través de los fideicomisos público y privado y del Convenio de indemnización.

En primer lugar, es importante señalar que aun cuando la Recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue emitida antes de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, en realidad esa situación se torna irrelevante, pues lo fundamental es que tanto la solicitud de reparación integral como la emisión de la resolución reclamada se hizo cuando ya estaba en vigor esa reforma constitucional.

En ese sentido, carece de relevancia la fecha de la recomendación, pues lo importante es determinar si el convenio y los fideicomisos referidos tenían como finalidad reparar de algún modo el hecho victimizante y, a partir de ahí, analizar si fue correcto que los montos determinados en la resolución reclamada fueran considerados como complementarios, o bien, si en su lugar debían fijarse como si se tratara de una reparación integral porque no se había compensado de ningún modo el hecho victimizante.

Es necesario recordar que en el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, razón por la cual el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y **reparar las**



violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Por su parte, en el artículo 1 de la Ley General de Víctimas, se establece que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

En el artículo 5 de la ley mencionada, se prevé que los mecanismos, medidas y procedimientos, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la compensación — como medida de reparación— sirve para indemnizar el daño causado por la violación a derechos humanos cuando no se ha logrado la restitución o ésta ha resultado insuficiente.

La Sala destacó que en el derecho comparado el tema de las compensaciones económicas por violaciones a derechos humanos suele analizarse en juicios de responsabilidad civil o de responsabilidad patrimonial del Estado, a través de acciones específicas creadas para ese efecto. En el caso de México, las víctimas pueden acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los aspectos restantes de una reparación integral, como por ejemplo, ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.¹⁹

Entonces, tenemos que tratándose de una violación de derechos humanos, las víctimas tienen derecho a una reparación integral que incluye cinco medidas distintas: (i) de restitución; (ii) de rehabilitación; (iii) de compensación; (iv) de satisfacción; y, (v) de no repetición. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está obligada a complementar aquellas que no se hubieran satisfecho previamente a través de otros medios.

En el caso concreto, respecto de las medidas de restitución, la autoridad responsable consideró que era materialmente imposible reestablecer la situación que existía antes del hecho victimizante, por lo que procedía el pago de una compensación como medida resarcitoria, que sería fijada en el apartado resolución impugnada. correspondiente de la consideró que la restitución implicaba el conocimiento de la verdad, por lo que estimó que, de consentirlo las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas continuaría con su representación en aquellos procedimientos o juicios que se encuentren pendientes de resolución y se vinculen con el hecho victimizante.

Como **medidas de rehabilitación**, señaló que estaba demostrado que el Instituto Mexicano del Seguro Social había

Véase la tesis 1a. LII/2017 (10a.), que lleva por rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO". Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, página 472. Registro: 2014345.



atendido a las familias afectadas, estableciendo atención médica vitalicia, absorbiendo sus costos, así como brindando la atención quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación especializada; el costo de auxiliares de diagnóstico, el importe de ayuda por solidaridad, el pago de viáticos para la atención médica fuera del lugar de residencia y la atención psicológica y psiquiátrica para los familiares.

Incluso, destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social creó un centro de atención para las necesidades administrativas y médicas requeridas por los afectados y sus familiares denominado "Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales [CAICE]", que funge como un canal de comunicación y enlace entre las familias afectadas y las autoridades de ese Instituto.

No obstante lo anterior, como medida de rehabilitación se estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales diseñe e implemente con personal especializado y capacitado [con la participación conjunta de las víctimas y de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] un programa terapéutico con enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, tendiente a fortalecer la reconstrucción de identidad de las y los niños, de tal manera que les permita disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por lo que hace al menor ***** ********

*********, se advertía que tenía garantizada una beca mensual por el tiempo que realice sus estudios, desde primaria hasta nivel

superior, en cualquier institución educativa pública o privada de la República Mexicana.

Por cuanto hace a las **medidas de satisfacción**, la autoridad responsable consideró oportuno que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, diseñe e implemente con la asesoría y acompañamiento de personal especializado en temas de memoria y verdad [con la participación conjunta de las víctimas y de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un programa tendiente a la reconstrucción de la verdad y la memoria a nivel personal y familiar en las víctimas.

Aunado a ello, determinó que se realizaran las acciones necesarias para el establecimiento de un grupo de trabajo integrado con las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas y expertos, con la finalidad de iniciar los trabajos sobre el diseño, planeación y creación de las medidas referidas.

De igual modo, instruyó a las Direcciones Generales de Asesoría Jurídica Federal y de Vinculación Interinstitucional de la propia Comisión para que se continúe con el acompañamiento de las víctimas sobre la permanencia en el lugar que ocupa o, en su caso, sobre su reubicación a un lugar óptimo del "antimonumento de la Guardería ABC".



En relación con las **medidas de no repetición**, la autoridad responsable tomó en consideración que como consecuencia del hecho victimizante se emitió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; sin embargo, estableció que de manera coordinada sus Direcciones Generales de Políticas Públicas, Capacitación e Investigación, así como de Vinculación Interinstitucional generen los mecanismos de coordinación necesarios para que, en caso, de que no se haya realizado una actualización de la normativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe e implemente un programa interinstitucional en el que se garantice la participación de las víctimas y se impulse a la entidades federativas faltantes en la creación o armonización de sus leyes con la Ley General mencionada.

Finalmente, en relación con la compensación, la autoridad responsable resolvió lo siguiente:

En el rubro de reparación del daño sufrido en la integridad física, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sostuvo que las víctimas sufrieron afectaciones en su integridad personal como consecuencia del hecho victimizante, por lo que las medidas de reparación serían determinadas en la parte relativa a las medidas de rehabilitación.

 daño moral que sufrió en la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos).

Para llegar a ese monto, tomó como referencia el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos denominado "Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay", el cual estimó similar en hechos, derechos lesionados y conceptos indemnizatorios.

Por lo que se refiere a las víctimas indirectas, se cuantificó la cantidad de \$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos) al esposo de la víctima y \$175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos) a cada uno de sus hijos.

En el rubro de **lucro cesante** o perjuicios ocasionados, la autoridad señaló que al momento de los hechos *** *****

******** ******** se encontraba en etapa adulta y percibía un ingreso laboral por su trabajo en una maquila, sin que se tuvieran datos sobre el monto de su ingreso, por lo que en equidad fijó el monto de \$1'000,000.00 (un millón de pesos).

Por lo que hace a la **pérdida de oportunidades**, se concluyó que lo relativo a las becas de estudio y la creación del grupo interdisciplinario referido en el capítulo de rehabilitación era suficiente.

Por concepto de daños patrimoniales generados como consecuencia de la violación de derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señaló que no quedaron comprobadas dichas afectaciones; sin embargo, fijó como cantidad \$30,000.00 (treinta mil pesos), que debía ser entregada a la víctima directa.



Para fijar dicho monto, tomó como referencia el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos denominado "Maritza Urrutia vs. Guatemala", en el que se fijaron mil dólares como gastos por llamadas telefónicas.

En relación con el pago de gastos y costas de un asesor jurídico privado, se determinó que los solicitantes habían manifestado que gastaron \$208,000.00 (doscientos ocho mil pesos) por cuestiones de asesoría legal y representación jurídica sin que exhibieran la documentación comprobatoria; sin embargo, señaló que establecer montos excesivos por esos conceptos repercutiría en detrimento de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, entonces, considerando el universo de víctimas existente y que la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal podía brindar asesoría jurídica gratuita a las víctimas, concluyó que por equidad debía pagarse la cantidad de \$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos) en favor de la víctima directa.

En lo que se refiere al pago de tratamientos médicos y terapéuticos no se determinó importe alguno por ese concepto, ya que el Instituto Mexicano del Seguros Social se había encargado de implementar las medidas aplicables, tal y como se explicó en el apartado de medidas de rehabilitación.

Tampoco se determinó monto alguno por cuanto hace a los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha costeado dichos conceptos a través de los mecanismos de ayuda establecidos en el "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del Incendio de la Guardería ABC", creado en cumplimiento al

Decreto Presidencial publicado el veinte de julio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación.

Aunado a lo anterior, de la solicitud hecha por *** *****

*******************, se advertía que no había incurrido en dichos gastos.

Precisado lo anterior, debe destacarse que la medida de compensación, se regula en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, de la manera siguiente:

- "64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
- I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
- II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;
- **III.** El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
- IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;
- **V.** Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;
- **VI.** El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;
- VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y



VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento".

Ahora bien, al emitir la resolución impugnada, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tomó en consideración que con motivo del hecho victimizante, se establecieron dos fideicomisos, a saber: (i) uno de carácter público denominado "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del Incendio de la Guardería ABC"; y, (ii) uno de carácter privado denominado "Fondo de Apoyo, Manutención y Educación".

A través del fideicomiso público se otorgaron ayudas de carácter económico a las y los afectados, como son: (i) ayuda vitalicia mensual para las madres de los menores y para las adultas lesionadas [equivalente al salario que percibían al momento del hecho]; (ii) beca educativa para los menores, de nivel básico a estudios superiores; (iii) pago de energía eléctrica en el domicilio de los menores y de los adultos lesionados en caso de que requieran el uso de equipos, así como (iv) asistencia médica vitalicia.

PODER asistencia médica vitalicia. LA FEDERACIÓN

Por su parte, a través del fideicomiso privado, se acordó la entrega en una sola exhibición de la cantidad de \$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos) en una sola exhibición a las madres de los menores con dictamen de incapacidad por

lesiones por quemaduras y a los adultos lesionados con dictamen de incapacidad; así como la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos) mensualmente y de manera vitalicia a las madres de los menores con dictamen de incapacidad por lesiones por quemaduras.

Asimismo, se firmó un convenio con los afectados para el pago de una indemnización a través del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos de la Secretaria de Gobernación, el cual ascendió a \$1'520,000.00 (un millón quinientos veinte mil pesos) para ***

***** ******** ******

Por tanto, la autoridad responsable sostuvo que los daños sufridos por esa quejosa por el hecho victimizante ya habían sido materia de una compensación como indemnización, razón por la cual únicamente era procedente identificar aquellas medidas complementarias a las antes descritas, con la finalidad de garantizar la integralidad de la reparación del daño.

Dentro de esos mecanismos y medios, se encuentran el convenio a través del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos de la Secretaria de Gobernación, el cual ascendió a \$1'520,000.00 (un millón quinientos veinte mil pesos) y el fideicomiso privado, con el



que se entregó en una sola exhibición la cantidad de \$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos).

Como se había anticipado, no le asiste la razón a los quejosos. Este Juez de Distrito estima que es irrelevante que los recursos económicos para cubrir una compensación por violación a derechos humanos provengan de un fideicomiso privado, ya que no es el carácter público o privado de los recursos lo que repara a las víctimas, sino el monto que se les destina, razón por la cual lo relevante es: (i) que dichos fondos sean destinados para indemnizar el hecho victimizante; (ii) que en su constitución haya participado alguna autoridad del Estado; y, (iii) que las víctimas reciban efectivamente esos recursos.

En efecto, de ninguna disposición de la Constitución o de la Ley General de Víctimas se desprende que los montos que deban recibir las víctimas con motivo de una compensación deban provenir forzosa e indefectiblemente de una partida presupuestal especifica de la autoridad estatal responsable de la violación, o bien, de un fideicomiso exclusivamente público.

Por el contrario, el derecho de las víctimas a recibir una compensación como parte de una reparación integral se satisface con la entrega y recepción de los montos que se determinen, independientemente del mecanismo que el Estado haya establecido para su entrega, es decir, la víctima no tendría ningún beneficio adicional si esos recursos económicos provienen de un fideicomiso público o privado.

Aunado a lo anterior, en el caso, el fideicomiso de carácter privado denominado *"Fondo de Apoyo, Manutención y Educación"*, fue creado entre otros, por el Gobierno de Sonora,

autoridad del Estado responsable de la violación de derechos humanos, y su constitución obedeció al hecho victimizante, es decir, es innegable que las cantidades que se entregaron a la víctima directa fueron con motivo de las lesiones que sufrió en el hecho victimizante, pues de otro modo no le habría sido destinada ninguna cantidad.

Por esa razón, si dicha cantidad estuvo destinada a compensar el hecho victimizante y fue constituida por una de las autoridades Estatales responsables de él, se torna irrelevante que su fuente haya sido un fideicomiso privado, pues este medio o mecanismo financiero fue el que eligió el Estado para llevar a cabo el pago de la compensación.

Y en ese supuesto, la facultad indemnizatoria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es meramente complementaria, pues más allá de la denominación o la forma en la que se haya enunciado en los instrumentos legales a través de los cuales se implementó el pago de aquellas cantidades, lo cierto es que éstas tenían como finalidad la reparación del daño ocasionado por el hecho victimizante.

Por otro lado, tampoco les asiste la razón a los quejosos al argumentar que se aplicó indebidamente el concepto de complementariedad en los montos de compensación que se fijaron en la resolución reclamada.



En efecto, es viable que las víctimas de violaciones a derechos humanos accedan a los recurso del Fondo en materia de reparación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; sin embargo, esa posibilidad está condicionada, entre otros aspectos, a que: (i) no hubieren alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; y, (ii) que no hubieren recibido la reparación integral del daño por otra vía, de conformidad con el artículo 149 de la Ley General de Víctimas, en el que se establece:

- "149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:
- I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación;
- II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;
- III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y
- IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación <u>integral, siempre y</u> cuando dich<mark>a solicit</mark>ud s<mark>ea avala</mark>da por la Comisión Ejecutiva".

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la compensación y la función indemnizatoria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe entenderse en términos de complementariedad, es decir, que en caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos se entregará, de manera complementaria, el monto no enterado a través de esas vías.

Entonces, de conformidad con el artículo transcrito previamente, lo que está prohibido es la duplicidad de la compensación más no su complementariedad.

Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 111/2017 (10a.), que lleva por rubro: "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMPENSACIÓN Y LA FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DEBE ENTENDERSE EN TÉRMINOS DE COMPLEMENTARIEDAD".²⁰

En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable estimó que la indemnización como compensación por el daño sufrido estaba satisfecha con los \$2'270,000.00 (dos millones doscientos setenta mil pesos) que ya se habían entregado a la víctima directa, lo que quiere decir que, en ese aspecto, la reparación integral del hecho victimizante ya estaba satisfecha, por lo que no existía un monto no enterado que estuviera pendiente de cubrirse.

Dicho en otras palabras, no resultaba necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas compensara o indemnizara complementariamente a la víctima directa, pues la reparación integral –por ese aspecto en específico– ya se había recibido a través de otras vías.

Consecuentemente, con independencia de la denominación que se le haya dado a los fideicomisos o convenios de los que vio beneficiada *** ***** ************************, lo cierto es que dichos mecanismos fueron constituidos con la finalidad de reparar la violación a derechos humanos con motivo del hecho

²⁰ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, Materia Administrativa, página 476. Registro 2014862.



victimizante, razón por la cual, si los montos ahí asignados fueron suficientes para considerar que hubo una reparación integral en el rubro de compensación, no era necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas complementara de algún modo las cantidades que ya le habían sido asignadas; máxime que los quejosos no controvierten las cantidades fijadas, es decir, más allá de los argumentos que se han desestimado, no dan parámetros para justificar que la reparación de esos conceptos no ha sido integral.

En efecto, la reparación prevista en la Ley General de Víctimas no es una vía exclusiva de indemnización tutelada en el sistema jurídico mexicano, razón por la cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es la única autoridad facultada para entregar montos por compensación por violaciones a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, la Comisión actúa en términos de complementariedad y armonización, respecto a las compensaciones que se hayan determinado mediante otros mecanismos o procedimientos de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación, a fin de que, en los casos en que la víctima no haya obtenido el pago de la totalidad de los daños materiales e inmateriales que haya sufrido por esas violaciones, se logre la integralidad que busca la reparación del daño.

Lo anterior, ha sido establecido por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 110/2017 (10a.), que lleva por rubro: "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA

DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO".²¹

De sostenerse lo contrario, se llegaría al extremo de afirmar que ninguna de las cantidades que ha recibido la victima directa tenía por objeto reparar la violación a sus derechos humanos y, por ende, que con independencia de que hubiere recibido cantidades por ese concepto, de cualquier manera debe otorgársele una compensación integral.

V. Cuantificación de la compensación a las víctimas indirectas. Aplicabilidad del criterio de la Primera Sala derivado del amparo directo 50/2015.²²

Los quejosos sostienen que fue indebido que se utilizara como referencia para la cuantificación de la compensación por daño moral el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominado "Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay".

Los quejosos alegan que en un diverso expediente de reparación integral [CEAV/CIE/093/2017], se utilizó como parámetro de indemnización por daño moral la cantidad de \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos), que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en favor de la madre de una menor fallecida, al resolver el amparo directo 50/2015.

Los quejosos alegan que en ese precedente, la Sala del Alto Tribunal no ordenó que se distribuyera el monto del daño moral

52

²¹ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II, Materia Administrativa, página 745. Registro: 2014861.



entre una o varias víctimas, sino que ordenó que dicho monto se pagara directamente a la víctima indirecta.

Así, los quejosos sostienen que fue indebido que se utilizara un precedente para fijar una compensación y después se dividiera entre las víctimas indirectas.

Por esa razón, los quejosos sostienen que se debió decretar una indemnización por daño moral por la cantidad de \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos) a cada una de las víctimas indirectas.

Este Juez de Distrito estima que son infundados esos planteamientos.

Como ya se ha dicho, la compensación como medida de reparación debe otorgarse a las víctimas de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho victimizante y teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Eso implica que una compensación no puede ser fija, es decir, no puede estar tasada ni basarse en precedentes judiciales de hechos similares, pues de lo contrario no sería individualizada y dejaría de lado las circunstancias de cada caso; de estimarse lo contrario, implicaría aceptar que las autoridades carecen de arbitrio para juzgar cada caso por sus particularidades.

Este Juez de Distrito estima que fue indebido que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se apoyara en un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como referencia para cuantificar el daño moral de las víctimas indirectas, pues no basta con hacer un ejercicio de comparación con casos similares, sino que la apreciación prudente y equitativa de las circunstancias particulares son las que permiten que el monto a indemnizar responda, efectivamente, a la proporcionalidad de los daños inmateriales que en el caso específico deparó la violación a sus derechos humanos.

Ahora bien, por esa misma razón, no se puede acceder a lo solicitado por los quejosos, esto es, que se utilice como parámetro un monto que la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó al resolver un caso [que no guarda en común hechos similares con el hecho victimizante que ahora nos ocupa], o bien, la compensación adoptada en un expediente diverso, pues precisamente eso también dejaría de lado el análisis de las circunstancias del caso y se incurría en la misma inconsistencia que se reclama, la comparación con otro caso.

En efecto, el hecho victimizante, por sí mismo, no es suficiente para sostener que todo el universo de víctimas directas o indirectas que produjo, deben obtener los mismos montos de compensación, por el contrario, cada una de ellas debe obtener una reparación integral individualizada y los daños a reparar siempre serán diferentes.

Aunado a ello, el amparo directo 50/2015 tiene elementos esencialmente distintos al caso que nos ocupa: (i) ahí falleció una menor; (ii) su madre demandó una indemnización a través de un juicio civil de responsabilidad; (iii) solo su madre fue actora en ese juicio [precisamente por esa razón solo se pagó el monto de la indemnización a ella sin que se dividiera]; y, (iv) no se analizó en sentido estricto una reparación integral por violación a derechos humanos.



Finalmente, este Juez de Distrito estima que el monto fijado a las víctimas indirectas como reparación del daño moral, no resulta por sí mismo inconstitucional o ilegal.

En efecto, la determinación de una cantidad de dinero como indemnización siempre irá acompañada de cierta discrecionalidad sobre la que debe ejercerse un control de constitucionalidad flexible, es decir, aun cuando hay parámetros para fijar una indemnización, lo cierto es que las cantidades asignadas a esos parámetros siempre serán discrecionales al no poder ser exactas ni tasadas.

De estimarse lo contrario se llegaría al extremo de sostener que una determinada cantidad es constitucional pero una cantidad solo un peso por debajo ya no lo es.

Por esa razón, al margen de los argumentos desestimados y sin otros que justifiquen el porqué las cantidades fijadas en la resolución reclamada por concepto de daño moral a las víctimas indirectas deben ser mayores, este Juez de Distrito no puede declarar su inconstitucionalidad.

VI. Cuantificación de la compensación a las víctimas indirectas respecto de otras víctimas indirectas.²³

Los quejosos sostienen que la resolución reclamada es ilegal porque dentro del diverso expediente CEAV/CIE/093/2017, relacionado con un núcleo familiar distinto, se utilizaron otros parámetros para determinar una indemnización a pesar de que se trata del mismo hecho victimizante.

Los quejosos sostienen que en ese expediente se determinó la cantidad de \$3'375,000.00 (tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos) como compensación a una víctimas, cantidad que resultaba ser la media de la más alta que por daño moral fijó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 18/2015.

Este Juez de Distrito estima que son **inoperantes** esos planteamientos, ya que descansan en una premisa que ya fue desestimada, al sostenerse que las compensaciones deben ser individualizadas y su constitucionalidad no depende de su comparación con otras, aun cuando eventualmente deriven del mismo hecho victimizante.

De sostenerse lo contrario, se llegaría al extremo de sostener que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está obligada a justificar cada cantidad que fije a una víctima a la luz de las que fijó para otras, lo que no solo sería imposible, sino que constituiría un despropósito, pues se acabaría incurriendo en una generalización que impediría que la reparación integral a cada una de las víctimas sea individualizada y tomando en consideración las circunstancias de cada una de ellas, incluso, se provocaría una estandarización sobre las víctimas si se dijera que las víctimas directas fallecidas deben tener un monto fijo de



indemnización, que las víctimas directas lesionadas otro y sus víctimas indirectas otro más.

Esa situación podría remediar los puntos de comparación entre todas las víctimas del incendio de la Guardería ABC; sin embargo, sería abiertamente contraria a los propios principios del derecho fundamental a la reparación integral, pues como ya se dijo, los montos de compensación no se limitan únicamente por el hecho victimizante en sí mismo.

Aunado a ello, el amparo directo 18/2015, que señalan los quejosos también tiene elementos facticos muy distintos, pues deriva de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, que constituye un mecanismo de indemnización distinto al previsto en la Ley General de Víctimas y en ese asunto una persona fue contagiada del virus de inmunodeficiencia humana en un hospital público con motivo de una transfusión de sangre, supuesto distinto a la situación en la que se encuentran las víctimas indirectas.

De hecho, de ese precedente derivó la tesis 2a. XXXII/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DAÑO PERSONAL GENERADO POR LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO. LA CARGA DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU PAGO NO DEBE IMPONERSE A UNA INSTITUCIÓN DIVERSA A LA CAUSANTE DE AQUÉL".²⁴

Incluso, debe tenerse en consideración que de conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Víctimas el principio de igualdad y no discriminación implica que las autoridades se conduzcan sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por

²⁴ Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, página 858. Registro 2016699.

razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En ese orden de ideas, la distinción hecha por la autoridad responsable entre distintos expedientes, no se ubica en ninguna de las categorías sospechosas a que alude la norma referida.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria; pues mientras la distinción es una diferencia razonable y objetiva; la discriminación constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.²⁵

Así, las condiciones y características particulares de cada núcleo familiar, víctima directa o víctima indirecta, constituye una diferencia razonable y objetiva, pues precisamente los preceptos de la Ley General de Víctimas obliga a que se les dé ese trato particularizado a cada uno; de ahí que la diferencia entre cada expediente no sea contraria al principio de igualdad, pues precisamente, se parte de la premisa de que no todas las víctimas se hallan en situaciones idénticas y equiparables.

58

²⁵ Véase la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.), que lleva por rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL". Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia Constitucional, página 112. Registro: 2012594.



VII. Pagos de gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación.²⁶

Los quejosos sostienen que la resolución reclamada resulta ilegal pues aun cuando no exista prueba directa en el expediente que demuestra la afectación sufrida sobre esos conceptos, lo cierto es que el hecho victimizante se encuentra probado, lo que demuestra indirectamente la afectación alegada, pues residen en Hermosillo, Sonora, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en la Ciudad de México.

Dicho argumento es **infundado**. En el artículo 64 de la Ley General de Víctimas se establece que la compensación debe comprender, entre otros conceptos, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación que se le ocasionen a las víctimas si debe trasladarse al lugar en donde recibe atención.

Al efecto, dicha norma señala que el monto de gasto comprobable mínimo no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del total.

ca<mark>ntidad por ese rubro</mark>.

Entonces, el solo hecho de que los promoventes vivan en Sonora y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté en la Ciudad de México, no desvirtúa la conclusión de la resolución reclamada, pues eso no demuestra que hubieren incurrido en esos gastos, los que por cierto deben ser comprobables al menos en veinticinco por cierto.

Incluso, su afirmación tampoco desvirtúa lo afirmado por la responsable en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha hecho cargo de esos gastos.

Al interpretar el artículo 64, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el reembolso de los gastos erogados no se encuentra vinculado indispensablemente a la existencia de pruebas que den cuentan de tales gastos, ya que se pueden cuantificar atendiendo a lo manifestado por las víctimas y a las circunstancias del caso, caso en el cual, se puede otorgar una compensación en equidad y bajo criterios de razonabilidad.

Lo anterior se advierte de la tesis 2a. LX/2018 (10a.), que lleva por rubro: "VÍCTIMAS DE DELITOS. EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EROGADOS NO REQUIERE FORZOSAMENTE DE PRUEBAS QUE LOS ACREDITEN".27

En ese sentido, ni siquiera era posible que se fijara una cantidad en equidad, pues la autoridad responsable señaló que los solicitantes no manifestaron haber erogado cantidades por esos conceptos, aunado a que en sus conceptos de violación tampoco refieren haberlos efectuado, sino que únicamente se limitan a señalar que esos gastos se deben presumir indirectamente por el solo hecho de estar demostrado el hecho

²⁷ Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia Administrativa, página 1487. Registro: 2017140.



victimizante, lo cual no encuentra sustento en algún precepto legal o de una interpretación jurisprudencial.

VIII. Precedentes y facultades para establecer cuantificaciones.²⁸

En este apartado, los quejosos se refieren a diferentes precedentes de otros órganos jurisdiccionales y a que, en su opinión, el Juez de amparo está facultado para fijar el monto de la compensación.

Los argumentos mencionados resultan inoperantes porque no están dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto reclamado, sino que se refieren a cuestiones ajenas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los argumentos propuestos por la parte quejosa deben servir para demostrar la ilegalidad del acto reclamado; sin embargo, pueden resultar inoperantes si existe algún impedimento técnico que imposibilite su estudio, que puede darse por distintas razones, tal y como sucede en el caso, pues más allá de los precedentes que cita o las manifestaciones que hace, con ellas no se pretende controvertir la resolución reclamada.²⁹

²⁹ Véase la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, que lleva por rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia Común, página 424. Registro: 166031.

No le asiste la razón a la promovente pues lo cierto es que su reincorporación a la sociedad, como le llama ella, no depende del establecimiento de una medida de rehabilitación en especificó que se pudiera fijar por el hecho victimizante.

Aunado a ello, en relación con el lucro cesante, lo cierto es que a través del fideicomiso público se otorgaron ayudas de carácter económico a las adultas lesionadas [equivalente al salario que percibían al momento del hecho, que es una ayuda vitalicia mensual, por esa razón, más allá de la forma en la que se haya fijado el monto de lucro cesante, este Juez de Distrito estima que dicha ayuda vitalicia mensual compensa ese rubro.

En ese mismo orden de ideas, en relación con la pérdida de oportunidades, no podría fijarse una cantidad específica de compensación, pues la imposibilidad para laborar que podría haberle causado el hecho victimizante no representa, por sí, una pérdida de oportunidades en los términos definidos en la ley; máxime que, como ya se dijo, esa imposibilidad fue compensada a través de otras medidas.

Por tanto, al ser infundados e inoperantes los argumentos hasta aquí analizados y no advertirse deficiencia de la queja que



suplir, debe negarse la protección constitucional solicitada, con excepción de lo establecido en el punto siguiente.

IX. Compensación del daño en la integridad física de la víctima directa.

En sus conceptos de violación primero y sexto, *** *****

********* ******* señala que la compensación como medida comprendida dentro de la reparación integral debe incluir, entre otros conceptos, la reparación del daño sufrido, que contempla la integridad física, psíquica y moral de la víctima; sin embargo, en la resolución reclamada, en el rubro de reparación del daño sufrido en la integridad física, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sostuvo que la víctima directa sufrió afectaciones en su integridad personal como consecuencia del hecho victimizante, pero concluye que las medidas de reparación serían determinadas en la parte relativa a las medidas de rehabilitación.

Ese planteamiento es **fundado**. En el artículo 27, fracción I, de la Ley General de Víctimas se establece que la reparación integral comprende la restitución, que es una medida que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación a sus derechos humanos.

Cómo acertadamente se estableció en la resolución reclamada, toda vez que *** ***** ******* ****** sufrió lesiones permanentes con un dictamen de incapacidad de setenta y seis por ciento, resultaba materialmente imposible reestablecer la situación que existía antes del hecho victimizante, por lo que procedía el pago de una compensación como medida

resarcitoria, que sería fijada en el apartado correspondiente de la resolución impugnada.

No obstante, en el apartado relativo a la compensación, específicamente a la reparación del daño sufrido en la integridad física de esa quejosa, la autoridad responsable concluye que la reparación de esos daños se considera en las medidas de rehabilitación.

A consideración de este Juez de Distrito, esa determinación no es correcta, pues en primer lugar la autoridad responsable reconoce la imposibilidad material para decretar una medida de restitución y sostiene que será compensada con una cantidad como indemnización; sin embargo, al fijar las compensaciones se contradice y concluye que basta con las medidas de rehabilitación.

Aunado a ello, la restitución y la rehabilitación, como medidas de la reparación integral, son distintas y persiguen finalidades diversas.

En efecto, de conformidad con el artículo 27, fracciones I y II, de la Ley General de Víctimas la medida de restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho victimizante; mientras que la rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa de la violación a los derechos humanos.

Entonces, si la medida de restitución no se puede decretar porque es materialmente imposible, como lo dijo la autoridad, debe sustituirse por una indemnización a manera de compensación, la cual debe establecerse en ese apartado y, al no haberse hecho así y en su lugar considerar que las medidas



de rehabilitación eran suficientes, debe concederse el amparo para subsanar esa inconsistencia.

SEXTO. Efectos. De conformidad con los artículos 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos y las medidas en que se traduce la concesión del amparo.

En el artículo 77, fracción I, de la misma ley, se señala que los efectos de la concesión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Por lo expuesto y fundado; se resuelve:

PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a



Notifíquese; personalmente a los quejosos, por oficio a la autoridad responsable y por lista al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 26 fracciones I, inciso e); II, inciso a); y, III, de la Ley de Amparo.

Lo resolvió y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Luis Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

Juez de Distrito

Secretario

El Secretario Luis Hernández Plata, hace constar que la presente foja corresponde a la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 449/2019 y sus acumulados 452/2019, 453./2019, 454/2019 y 458/2019, promovidos por Santiago Blancarte Leal, Yesenia Guadalupe Blancarte Valenzuela, Ana Luisa Valenzuela Munguía, Alexis Santiago Blancarte Valenzuela y Diego Alexander Blancarte Valenzuela; y que en esta misma fecha se giré el oficio a la autoridad responsable, comunicándole la resolución que antecede. Conste.

En	a las nueve horas	s, s	se publicó	la resolución	que
antecede,	por medio de lista fijada en los estrados	s. C	Doy fe.		

De conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en esta fecha se entrega el expediente al actuario judicial. **Conste.**



Archivo Firmado: 00410000245142080005005.doc

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmant e	Nombre:	LUIS HERNÁNDEZ PLATA	Validez:	ОК	Vigente		
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000a67f	Revocación	ОК	No Revocado		
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/08/2019T19:19:04Z / 16/08/2019T14:19:04-05:00	Status:	ОК	Valida		
	Algoritmo:	Sha256withRSA		l .			
	Cadena de Firma:	0d e8 67 f7 9f 45 60 81 23 4e 48 89 cd d9 26 76					
		b1 ac 40 86 e5 82 f4 9b 70 38 76 44 af 29 45 a3					
		a6 80 70 2b c9 e1 ff 3c 6f 02 65 a1 21 3b 98 37					
		12 8d 5d f6 90 e1 be a6 f7 56 24 fa c8 cd 4a b8					
		6f 73 b3 51 d2 46 96 f6 30 39 59 e5 20 b7 8b f1					
		e1 25 59 14 27 f8 c2 d2 f0 b2 a1 a0 50 fc 38 58					
		0a 54 00 58 a7 35 3d 60 1e d8 8d d0 6d f1 39 d6					
		51 af 4f 65 0b f7 1a 12 10 c2 e4 4d 69 1f ba c4					
		12 42 e6 a4 dd 60 cd c4 9f 42 ed e8 89 42 dd 2f					
		cc 2d a6 4d a7 b7 5e ff b8 21 3f 15 b5 ac 54 1e					
		28 a5 5a 37 a9 a2 ee 06 02 28 5e b6 d5 00 e1 e4					
		21 e9 75 c7 86 7e a1 23 1a 23 4a 1c 59 d2 39 61					
		33 bc 9a f3 13 78 c2 3c 24 7b a6 ec 34 12 cb a1					
		41 0a 29 b6 47 07 db 0c 07 34 29 61 78 c0 cf 35					
		53 ce 8e 6d 3e 67 b9 dc d9 f0 8e 4d 6d a0 fc a1					
		2d 8d f9 d4 8a f7 36 ee d5 d5 ce 21 6f dc 21 12					
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/08/2019T19:19:04Z / 16/08/2019T14:19:04-05:00					
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal					
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0.02				

Archivo firmado por: LUIS HERNÁNDEZ PLATA

El licenciado(a) Luis HernÃndez Plata, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.